

E

Editorial

Inseguridad en los centros de salud

El Gobierno es el primer llamado a desterrar los ataques que se han producido dentro de los Cesfam en el país.

Con mayor frecuencia se están conociendo casos de amenazas y agresiones a funcionarios de los Centros de Salud Familiar (Cesfam), de parte de pacientes o sus familiares, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentran colapsados. Trabajar en este ambiente de violencia ya no es una situación aislada y, por lo mismo, preocupa a los gremios que representan a los trabajadores de la salud primaria.

La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para la población en general, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país, lo que representa un fuerte aumento si se compara con 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos de la pandemia.

En el contexto de la violencia que se ha reportado en algunos centros de salud, el Ministerio de Salud ha señalado que el Gobierno evalúa la posibilidad de tener vigilantes armados, como los que tienen los bancos. El tema se analizará con el Ministerio del Interior y los municipios, que son los que administran los Cesfam.

También el Gobierno acordó la creación de una mesa de trabajo para abordar las agresiones contra los funcionarios de la Atención Primaria de Salud (APS), tras una reunión sostenida entre la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) y el subsecretario del Interior. Los funcionarios han expuesto que la violencia incluye amenazas de muerte que ponen en riesgo a quienes están cumpliendo la función de servicio público. En algunos casos, delincuentes y narcotraficantes interfieren en la labor de los funcionarios de salud, dando órdenes de que no pueden atender a quienes quedan heridos después de balaceras entre bandas rivales. En algunas comunas, incluso los funcionarios ya han paralizado para advertir a las autoridades por la situación de violencia en la que deben desempeñar sus funciones.

Es evidente que se requiere de nuevas medidas, que lleven más seguridad tanto a los pacientes de los centros de salud como a quienes allí se desempeñan. El Gobierno es el que tiene que decidir cómo hacerlo.